

Sociedad y contaminación: de víctima a guardián*

Lilia Albert

La experiencia en países desarrollados

Cuando se revisa la historia de la lucha contra la contaminación en los países desarrollados, se encuentra en todos los casos un patrón similar: Al principio, demandas y reclamaciones aisladas de pequeños grupos por problemas específicos; usualmente la respuesta de las autoridades es desestimar las quejas o minimizarlas, negar el problema, desprestigiar o reprimir a los dirigentes, y en términos generales defender el statu quo y los intereses de los causantes de la contaminación.

Después, si la demanda persiste, las autoridades apelan a comparar los beneficios de la actividad contaminante (empleos, desarrollo económico, etc.) con los altos costos de controlarla, y concluyen que lo último no sólo va a requerir mucho dinero - que por lo común no hay-sino que tendrá costos sociales que la comunidad desconoce, no puede afrontar y no está considerando al hacer su demanda. Por lo tanto, es mejor dejar las cosas como están.

Si las presiones continúan se puede buscar algún investigador flexible, hacer una campaña de convencimiento, tomar alguna medida cosmética como crear una nueva dependencia o cambiar un poco la legislación, o bien, en casos extremos, decidir algunas acciones generalmente más apropiadas para ser publicitadas que para resolver el problema.

En los países desarrollados para responder a estas tácticas la sociedad crea más grupos, se organiza mejor, forma grandes redes nacionales e internacionales, o comisiona investigación independiente para comprobar qué hay de cierto en las declaraciones oficiales y en las campañas de las grandes corporaciones, pero, sobre todo, se hace un trabajo constante y congruente para obtener fondos, consolidar grupos, mantener las demandas y difundirlas.

Cuando estos grupos ganan la lucha continúan creciendo, establecen centros o sistemas de información confiable sobre la contaminación, se interesan en los problemas de otros países y llegan a tener una fuerte presencia internacional como ocurre, por ejemplo, con Greenpeace o Pesticide Action Network. En algunos casos comienzan a participar políticamente en su país, pues sus integrantes consideran que entre los principales obstáculos en la lucha contra la contaminación están los intereses de los partidos políticos, su profunda ignorancia sobre las consecuencias a largo plazo de este fenómeno, y en especial, su indiferencia en este tema por su obsesión en las ganancias políticas y económicas de corto plazo.

En algún punto de este proceso los grupos que luchan contra la contaminación obtienen la participación de investigadores y logran establecer una base científica sólida para justificar sus demandas, la cual con frecuencia es irrefutable y llega a ser fuente esencial de información para grupos de otros países. Al mismo tiempo, obtienen un nivel de credibilidad muy superior al de las autoridades involucradas, y lo mantienen gracias a la congruencia de sus acciones.

Aunque en esta etapa la primera respuesta de las autoridades es la reacción automática de desprestigiar, amenazar, negar, corromper, etc., puede ocurrir que se den cuenta de que el movimiento popular empieza a tener fuerza política y entonces decidan tomar la iniciativa. De esta forma, pueden reconocer los problemas de contaminación, y si concluyen que los efectos ambientales o sobre la salud a la larga van a costar más caros que resolverlos, deciden la aplicación de medidas inmediatas.

En cualquiera de estos casos finalmente se establecen dependencias cuyo trabajo

ya no es preparar declaraciones tranquilizadoras o rebatir los argumentos sociales, sino averiguar qué pasa en realidad con la contaminación; cuáles son sus consecuencias tanto probadas como posibles; cuál puede ser el costo en el presente y en el futuro para la sociedad y el gobierno; cuál es el precio de controlar la fuentes de contaminación y mediante qué mecanismos puede lograrse.

Así, se crean agencias oficiales con una fuerte base científico-técnica que pueden responder seriamente a las demandas sociales y que, con el tiempo, logran credibilidad nacional e internacional y hacen un eficaz trabajo preventivo y correctivo.

Este proceso ha sido siempre una consecuencia directa de la presión y la conciencia social sobre el problema, y de la persistencia y congruencia de las demandas. Se puede decir que ningún gobierno ha decidido por sí mismo y sin presiones, controlar la contaminación.

Intervienen en este proceso muchos factores, como la percepción social de un problema, el nivel general de educación, la presencia de científicos y técnicos que colaboren con estos grupos, los cuales son un recurso cuando por razones políticas, económicas, sociales o de imagen, los gobiernos deciden pasar de la etapa de las negaciones y las declaraciones a la de las acciones. Obviamente, también influye el nivel de enfermedad o riesgo que las sociedades están dispuestas a aceptar a cambio de los beneficios de la actividad contaminante y, claro está, del tiempo y del dinero que puedan dedicar a apoyar y participar en esas actividades. Entre los casos en que se ha logrado cambiar la política oficial están los de Manamata y Love Canal, las restricciones al uso de algunos plaguicidas, y el control de las actividades industriales en Europa después de los accidentes de Seveso y Basilea.

* Primera de dos partes